

**V Jornadas de Investigadorxs en Formación**  
**Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)**  
**Ciudad de Buenos Aires, 7, 8 y 9 de octubre de 2020**

EJE 10. El financiamiento del desarrollo económico

**La gestión económica de la UCR (1983-85): redefinición de un modelo de desarrollo en un contexto de profundas transformaciones económicas**

Ignacio Andrés Rossi<sup>1</sup>

**Resumen**

El presente trabajo propone abordar las principales características de la gestión radical del Ministro de Economía Bernardo Grinspun (1983-85). El contexto de la transición a la democracia en 1983 fue caracterizado por una vitalidad asentada en la derrota del anterior gobierno militar (1976-83) y la creencia de que el contexto internacional favorecería a la República democrática. Sin embargo, progresivamente la crisis económica mundial y los problemas de financiamiento se volvieron más hostiles y, como contracara, las intervenciones económicas del gobierno radical chocaron con esa realidad, ignorando el proceso de financiarización asentado en nuestro país durante la dictadura militar (1976-82). Analizar los esfuerzos de la vieja tradición desarrollista que encarnaba Grinspun, como gran parte de los funcionarios del alfonsinismo, nos servirá para entender como la raíz de las profundas transformaciones socioeconómicas mundiales, relacionadas con el creciente neoliberalismo internacional, coadyuvaron a que el cambio de paradigma económico doméstico se tornara en una necesidad central para controlar las principales variables económicas y, en definitiva, mantener márgenes de gobernabilidad que permitan a la democracia consolidarse.

**Palabras clave:** Transición-democracia-economía-financiarización-gobernabilidad

---

<sup>1</sup> Licenciado en Historia (Universidad Nacional de Luján) y maestrando en Historia (Universidad Nacional de General Sarmiento). Correo: [ignacio.a.rossi@outlook.com](mailto:ignacio.a.rossi@outlook.com).

## Introducción

El presente trabajo forma parte de los avances de mi tesis de maestría (UNGS) realizada también en el marco del Proyecto de investigación UNGS 2018-2020: “Las interpretaciones heterodoxas de la historia económica argentina reciente: principales contribuciones y controversias”, dirigido por la Dra. Karina Forcinito (UNR-FLACSO-UBA). El trabajo debe ser entendido en el contexto de la transición democrática argentina desarrollado por la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989). El devenir de dicho proceso resultó ampliamente condicionado en el aspecto económico en un contexto de fuertes restricciones externas causadas por la enorme deuda, la caída de los términos de intercambio, la creciente influencia de organismos internacionales para presionar por los intereses de dicha deuda y la presencia de poderes económicos locales tradicionales (la UIA y la SRA) y otros consolidados tras la dictadura con gran capacidad de influencia en las redes más o menos formales del gobierno.<sup>2</sup> En este marco, encarar la construcción de un régimen democrático con una arquitectura que trascendiera la mera celebración de elecciones se tornó una tarea compleja, quizás porque gobernar la economía en el marco de un régimen limitado a procedimientos elementales de la democracia pero no a una estructura de consenso partidario y ejercicio parlamentario, fue particularmente difícil. En este cuadro el primer equipo económico del alfonsinismo cumplió un papel que reflejó los cambios de la época y cómo las antiguas recetas nekeynesianas resultaban difícilmente practicables además de comenzar a ser rechazadas por las ansias en la estabilidad económica y la posibilidad de realizar reformas que identificaban al Estado como el principal mal.

La idea general que estructura este trabajo sostiene que el Plan de Bernardo Grinspun formó parte de una raíz clásica del desarrollismo que caracterizó a los cuadros radicales que desempeñaron funciones durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966) (Heredia, 2006). Así mismo, y a la luz de los hechos, se entiende que la coyuntura económica de la década de los 80 asistía a una redefinición del capitalismo global que en América Latina se caracterizaba por la

---

<sup>2</sup> Nos referimos, específicamente y no tan generalmente como los autores, a aquel sector del empresariado con mayor capacidad de *lobby*, como los que se organizaban formalmente en la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General de la Industria (CGI), el Consejo Argentino de la Industria (CIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) entre otras, y los de organización informal como el Consejo Empresario Argentino y los Capitanes de la Industria que se vinculaban con el Estado por fuera de la lógica corporativa (Beltrán, 2006). Por otro lado, los representantes de las industrias pequeñas y medianas orientadas al mercado interno se encontraban en una posición de relativa debilidad, pues la CGI había recuperado su personalidad jurídica en 1984 luego de ser disuelta por la dictadura.

crisis de la deuda. No obstante, el equipo económico de aquel entonces tuvo un diagnóstico positivo de dicha coyuntura, lo que lo llevó a confrontar con actores internacionales y poderes locales, debiendo finalmente que desistir ante las presiones de diversas latitudes sociales. De esta forma, este trabajo se propone describir y reflexionar en torno a los problemas económicos más acuciantes que jaquearon la propuesta económica neokeynesiana, la última de hecho, de cara al consenso neoliberal y la aceptación de los cánones ortodoxos clásicos posteriormente en los 90.

### **La primera gestión económica de la UCR en 1983**

Bernardo Grinspun asumió al frente de la cartera económica del gobierno democrático en 1983. El nuevo equipo, diagnosticaba que el problema principal de la economía se originaba en los altos niveles de desocupación y los bajos salarios, que si bien era cierto en tanto las consecuencias de la dictadura militar y el fracaso liberalizador de su plan económico habían dejado consecuencias en esos aspectos (Basualdo, 2001), se ignoraban los cambios sustanciales producidos en el funcionamiento económico en los últimos años. Según esta mirada, ambos indicadores provocaban una caída abrupta de la demanda y una retracción de la producción. De modo que se condujeron los esfuerzos de la política económica a centrarse en la dinámica de la capacidad industrial ociosa y, a su vez, a generar una reactivación del mercado interno combinada con una mayor recaudación impositiva por lo que se esperaba reducir así el déficit fiscal que en verdad era significativo en tanto se acumulaban los intereses de la deuda externa. En el peor de los casos, el equipo entendía que se produciría un crecimiento con inflación, originado en la mayor emisión monetaria, aunque en este aspecto también se ignoraban los argumentos que provenientes de neoestructuralismo diagnosticaban que las economías latinoamericanas se encontraban en un régimen de alta inflación caracterizado por un efecto reptante de la misma (Schuldt, 1988).

La intención bajo estos supuestos era ordenar el sector externo y restablecer el equilibrio, desacelerando la inflación simultáneamente con un mayor incentivo por la modernización económica y una mayor atracción de las inversiones en un contexto en que la principal variable de ajuste era esta última. En este programa, el salario real y el empleo, tuvieron un lugar prioritario, ya que los sectores que venían postergados desde la dictadura lograron una reactivación de la demanda global por un breve lapso de tiempo. El gasto, también fue un componente central en el programa Grinspun, debido a que el estímulo a las inversiones, como la construcción de viviendas, se desarrollaría con un dólar sobrevaluado con el objetivo de atraer inversiones futuras (Schvarzer, 1988; Canitrot, 1991).

Por otro lado, estaba el problema de la deuda y el hostil contexto externo comercial y financiero que desfavorecía a la Argentina con caídas en los precios exportables y escasez de capitales. Al respecto, había un optimismo por parte del gobierno democrático en que las condiciones de la negociación externa con los acreedores internacionales se tornarían favorables para las renacientes democracias. Un optimismo fundado en la voluntad de los acreedores y en el gobierno de los EE.UU por apoyar a las democracias latinoamericanas y de mostrar cierta benevolencia con los países deudores para renegociar en condiciones favorables para estos últimos (Cavarozzi, 1997).

Con respecto a este punto, el equipo económico liderado por Grinspun aseguraba que la deuda no constituía un problema financiero, sino más bien político (Pesce, 2006). En esta línea, se intentó una negociación directa con los acreedores, evitando pasar por el FMI, en la que se supeditaran los pagos al crecimiento del país a un 10-15 de las exportaciones. Esta postura fue rechazada, tanto por los acreedores como por los gobiernos centrales, a lo que se sumaba que la estrategia heterodoxa del ministro Grinspun en la política interna, no era bien vista por el FMI quien fomentaba un acuerdo y un ajuste con contención salarial (Brenta, 2019). Sin embargo, los esfuerzos en este sentido no se agotaron y fue así que se intentó regionalizar el problema de la deuda integrando a otras economías latinoamericanas en la cuestión. En este cuadro se desarrolló el Consenso de Cartagena, en el que se reunieron la mayoría de los países deudores en la región con el fin de reclamar a los acreedores la renegociación de la deuda ante el aumento de las tasas de interés internacionales. Se difundió un documento común y la Argentina presentó al FMI una carta formal en la que, entre otras cosas, reclamaba que se reconociera la imposibilidad del país en efectuar los desembolsos se opte por una estrategia que permitiera primero crecer. Finalmente, el FMI ignoró la carta enviada por el gobierno argentino y los acreedores externos también mostraron una indiferencia ante el reclamo acrecentando las presiones para llegar a un acuerdo (Machinea y Sommer, 1992).

Este diagnóstico positivo sobre el que asumía la gestión Grinspun, también entendía que en el plano internacional favorecería a la Argentina un aumento en los precios de granos junto con la posibilidad de colocar la producción en nuevos mercados. Según algunos autores, el argumento implícito de la gestión económica, era que se podía reeditar el modelo de sustitución de importaciones, incluyendo el problema de la balanza de pagos originado en la deuda externa y una solución del mismo cimentada sobre un crecimiento sostenido en la reactivación de la demanda local. Esta argumentación se originaba en una “nostalgia” en el pasado (especialmente en el gobierno de Arturo Illia, del que provenían muchos antiguos funcionarios) así como una negación de la crisis por la que atravesaba el Estado (Pesce, 2004).

De esta forma, el plan Grinspun se puso en marcha y las primeras medidas se dirigieron decididamente a un aumento de los salarios industriales, el establecimiento de pautas para la variación futura de los precios y las tarifas públicas (más un sistema específico de control de precios industriales), la determinación del tipo de cambio y la reducción de las tasas de interés reguladas (Frenkel y Fanelli, 1986). Por otra parte, como hemos mencionado, se apuntó a combatir el déficit fiscal con una mayor recaudación impositiva, un aumento de las tarifas públicas y una reducción del gasto público. Sin embargo, parte de este último fue reorientado hacia la educación y a planes sociales tendientes a reducir la pobreza en detrimento de los cuantiosos gastos militares que se desarrollaron en la etapa previa (Rapoport, 2010).

Las políticas implementadas por el plan Grinspun se apuntaron algunos éxitos para fines de 1984. Se produjo el crecimiento de la producción, el PBI aumentó un 2.6% (el del producto industrial en un 3.8% y el agropecuario en un 3.8%). Por su parte, el empleo, los salarios reales y el consumo también mostraron signos de reactivación. La anunciada reorientación del gasto se llevó a cabo y el gasto en servicios sociales aumentó (de un 19.5% en 1983 paso a un 32.3% en 1984). También, se lograba un balance comercial positivo, a pesar del deterioro de los términos de intercambio que caracterizan a aquellos años y los servicios de la deuda prácticamente no aumentaron. Sin embargo, el déficit fiscal se mantuvo en 14 puntos del PBI y la inflación persistía, lo cual comenzó a hacer visible que esta política inicial del gobierno democrático no atacaba ninguno de los problemas estructurales que tenía la economía argentina caracterizadas por el endeudamiento externo, las prebendas estatales acumuladas hacía décadas y la fuga de capitales subsidiada por un sistema financiero que había sido liberalizado desde la dictadura (Heymann, 1986).<sup>3</sup>

La disimilitud de los resultados acarrió la contracara del fracaso de la renegociación de la deuda externa en los términos que la planteaba el equipo económico combinándose con la caída de la inversión bruta fija, el fracaso en la recuperación de las cuentas públicas y el contraste del deterioro salarial.<sup>4</sup> Es decir, los problemas estructurales que mostraba la economía al inicio del gobierno democrático en 1983 siguieron presentes luego de implementarse la estrategia del

---

<sup>3</sup> En aquellos años desde el norte se iniciaba un periodo caracterizado por poner fin al control de movimientos de capitales con el extranjero, es decir, liberalizando los sistemas financieros internacionales como forma de poner en marcha un movimiento de desregulación monetaria y financiera que condujo a una rápida expansión de los mercados de obligaciones interconectados entre las naciones permitiendo la aparición de un sistema financiero mundial acorde a la financiarización y la mundialización financiera que entraría en contradicción con las propuestas alfonsinistas (Basualdo, 2006).

<sup>4</sup> Con respecto al déficit fiscal, éste había bajado casi 3 puntos del PBI, pero a razón de una caída del gasto y no de una mayor recaudación como se esperaba.

equipo Grinspun y las presiones por cambiar la orientación económica estaban presentes en los organismos internacionales y poderes locales concentrados domésticos (Ortiz y Schorr, 2006). Es por ello que se comenzaba a evidenciar que la crisis fiscal era más intensa de lo que se suponía y que la inflación se transformaba en una variable casi imposible de controlar, pues los precios al consumidor habían incrementado en el año 1984 más del 600% erosionando la recaudación del sector público y naturalmente cualquier aumento salarial (Damill y Frenkel, 1994).<sup>5</sup>

Ante el fracaso del plan Grinspun y la creciente presión de los acreedores externos y la Reserva Federal de EE. UU, el equipo económico pasó a una segunda etapa en lo que respecta a su lectura del proceso económico nacional. En esta oportunidad, durante la segunda mitad de 1984 se envió una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) retractándose de la confortativa posición inicial para responder a los lineamientos del organismo.<sup>6</sup> Para diciembre del mismo año el gobierno daba marcha atrás al plan inicial y junto con el acuerdo con el FMI se desarrollaba el régimen de capitalización de la deuda privada, mediante la cual se permitía a acreedores externos transformar en capital las obligaciones de la firma deudora que luego se registraría según la Ley de Inversiones Extranjeras pero que sin embargo no daría resultados cuantiosos. Este mecanismo era avalado por el Banco Central, el cual acreditaba por cada dólar de deuda la diferencia entre la tasa de cambio oficial y la que surgía del seguro de cambio implementado (Bekerman, 1990).

Pero mientras esta estrategia de mediano plazo para capitalizar la deuda externa no daba resultados, en lo que se insistía es en un acuerdo de corto plazo que estabilizara la inflación y el gasto público. De esta forma, en septiembre de 1984 se llegó a un acuerdo *Stand-By* con el FMI en el que se asumía un cambio de rumbo económico por parte del gobierno argentino. En este cambio, el equipo oficial avalado por el presidente se retractaba de la postura inicial que

---

<sup>5</sup>Una de las hipótesis al respecto del plan Grinspun es que gran parte de su fracaso se origina en el plano de las alianzas con el poder económico local. Es decir, al haber pactado con un sector de la burguesía debilitado tras la dictadura, dejando al margen a los grandes grupos económicos que se habían fortalecido durante la misma, así como a los acreedores externos, que desde la crisis de la deuda se convertían en actores relevantes en el plano nacional. Por otra parte, también cabría agregar que el fracaso en las concertaciones frente a los sindicatos quienes produjeron más de 700 paros a lo largo del gobierno no es desdeñable (Ortiz y Schorr, 2006).

<sup>6</sup>Durante la primera mitad de 1984, las negociaciones con los bancos como con representantes del gobierno de EE. UU y varios países latinoamericanos, condujeron a un préstamo puente para la Argentina. Con este acuerdo se buscaba evitar por todos los medios que la Argentina declarase formalmente una moratoria. Sin embargo, la falta de compromisos por cubrir los vencimientos del préstamo, produjo que se sustituyeran las obligaciones por garantías otorgadas para su cancelación. Cuando se hizo evidente que el programa económico de Grinspun no daba resultados el gobierno argentino comenzó a restablecer las negociaciones con el fondo (Machinea y Sommer, 1992).

tenía como baluarte el crecimiento mediante el consumo y centraba sus esfuerzos en las exportaciones y la inversión privada. El préstamo concretado fue por la suma de 1.419 millones de dólares y el conjunto de políticas contenidas en este programa se aglutinaba en un aumento de las tarifas de servicios públicos, aumento del tipo de cambio, reducción del déficit fiscal y contracción monetaria. Además, el FMI establecía un plazo de tres meses para evaluar el cumplimiento del programa en el país e utilizaba la estrategia de condicionar los futuros desembolsos según la evolución de los índices macroeconómicos. Casi simultáneamente se concretaron negociaciones con los bancos acreedores y con el Club de París que culminaron entre 1984-1985 (Gerchunoff y Llach, 2019).

Hasta el mes de diciembre de 1984 se efectuaron los desembolsos a pesar de la desconfianza de los 320 bancos acreedores en la capacidad de Alfonsín por cumplir las medidas ortodoxas pactadas.<sup>7</sup> No obstante, durante aquel mes se hacía evidente que los resultados de la política económica no se aproximaban a lo buscado. Los aumentos en las tarifas públicas inmediatamente desembocaron en alzas en el resto de los precios provocando una ola inflacionaria. Lo mismo ocurría con la devaluación de la moneda que, acompañada de la restricción monetaria y cierta liberalización del sistema financiero, producían un alza brutal de las tasas nominales de interés que terminaba funcionando como una predicción de la inflación futura e incrementando más la presión inflacionaria.<sup>8</sup> Está claro que en este contexto la actividad productiva veía limitada su capacidad y tendía a caer revelándose que el ajuste tradicional que imponía el FMI no daba resultados ante un sistema de precios tan frágil como al que había llegado la argentina en 1984 (Fanelli y Frenkel, 1994).

Como Smith y Cusminsky de Cendredo (1988) lo señalan, desde la crisis de la deuda de 1982 los programas ortodoxos del FMI fracasaron no solo en Argentina, sino en México, Bolivia, Brasil y Perú. En este sentido, las políticas ortodoxas tuvieron más éxitos en efectuar los pagos externos que en la reducción de la inflación. En parte, los programas fracasaban por

---

<sup>7</sup> Como lo sostienen William Smith y Cusminsky de Cendredo (1988) a pesar de los diversos planes de estabilización ortodoxos existentes, es posible identificar un paradigma general que respondían a las líneas pactadas por los organismos financieros en aquellos años. Entre ellas, la corrección del déficit del comercio exterior, la estabilización de reservas internacionales, la eliminación del déficit en el sector público y la reducción de la inflación eran prioritarios (p. 66).

<sup>8</sup> El sistema financiero se reformó formalmente en julio de 1982 y estuvo centrado en dos objetivos fundamentales. Por un lado, se trató de reducir el valor real de los préstamos bancarios (aliviar a los deudores) y consolidar las deudas. Las tasas de dichos préstamos se fijaron muy por debajo de la inflación. La reforma estuvo acompañada de una devaluación y en conjunto estas medidas produjeron un salto en la inflación: el IPC aumentó más del 50% para fines de 1984. Estos resultados resultaron cruciales para la apertura democrática y dejaron un sistema financiero con una creciente fragilidad (Heymann, 1986).

razones técnicas, pero los conflictos sociales por parte de sindicatos y empresarios que luchaban por ganar o mantener beneficios fiscales desembocaban en presiones distributivas que sin dudas agravaban la coyuntura. En este sentido, el papel del capital y el trabajo cumplía un papel crucial debido a que el trabajo luchaba para elevar sus salarios y los capitalistas respondían, con capacidad para hacerlo gracias a una estructura concentrada con escasa influencia de la mano de obra organizada, elevando los precios.

Es de destacar que entre las profundas transformaciones que dejaba la dictadura militar quizás la más importante era el cambio drástico en las alianzas sociales. Es decir, durante la ISI estas habían estado formuladas en un pacto entre asalariados y empresas nacionales frente al poder de las empresas que eran mayormente norteamericanas y que controlaban la producción y lideraban el proceso económico. Durante la segunda etapa de la ISI el capital transnacional comenzó a convertirse en un obstáculo para concretar un desarrollo nacional más complejo a nivel local. Pero a partir de la dictadura y de las transformaciones socioeconómicas que esta produjo los acreedores externos y el capital concentrado (local y extranjero) adquirieron un protagonismo creciente. Estos grupos pasarían a controlar el proceso económico frente a una clase trabajadora derrotada tras las políticas de la dictadura y una subordinación del Estado a sus intereses privados en tanto éste mantenía antiguas prebendas como sobrepagos, descuentos impositivos, subvenciones de diferente tipo, entre otras. Principalmente el proceso de acumulación que lideran estos sectores se va a caracterizar por la valorización financiera en detrimento de lo que había sido la estratégica participación de los sectores populares (como agentes del consumo) en la etapa previa. De ahora en más el proceso productivo que esta fracción del capital llevaba a cabo fue prescindiendo de los sectores populares en el sistema económico (Basualdo, 2001).

Otro de los aspectos claves para entender los conflictos políticos económicos desde la apertura democrática era el cuestionado rol del Estado en la producción. Al momento de la apertura democrática, el Estado participaba en 573 empresas, de las cuales en 305 era el único propietario y en las 222 restantes era socio minoritario. Además solo 14 empresas concentraban más del 50% de lo producido por el Estado, lo que producía un sobredimensionamiento del sector público, sobre todo en el difícil contexto nacional e internacional de aquellos años. De hecho los gastos de estas empresas excedían sus ingresos, lo cual arrastraba a que el Estado Nacional financiara los déficits a través del Tesoro y créditos nacionales e internacionales (Bocco y Naum 1999; Cortes Conde, 2005). Anteriormente se producía un financiamiento que se caracterizaba por las retenciones al comercio exterior, la recaudación del sistema de

seguridad social, impuestos al patrimonio y el impuesto inflacionario.<sup>9</sup> Pero en aquellos años esta dinámica ya no lograba canalizar la fuente de recursos que habían significado anteriormente. Algunos de los motivos de este cambio lo componían la caída del precio de los productos agropecuarios, el envejecimiento de la población y la evasión impositiva, lo cual solo dejaba paso a un impuesto inflacionario que se volvía cada vez más explosivo (Botto, 1999). El problema del sobredimensionamiento del sector público había sido un problema considerado por la UCR desde tiempos electorales, de forma que en 1984 se puso en marcha un programa de reprivatizaciones parciales en las que hasta mediados de 1985 se concretó para algunas empresas como SIAM, Sol Jet, Opalinas Hurlingham y Winco para el caso de la azucarera Las Palmas del Chaco Austral se llamó a licitación. Para llevar a cabo estas privatizaciones el presidente había creado la Comisión 414 (en alusión a al decreto que la creaba) integrada por el Secretario General de la presidencia German López y otros ministros. Sin embargo como lo señalara Mercedes Botto (1999) “las re-privatizaciones fueron irrelevantes en términos de los grandes números y no produjeron recorte alguno en los recursos destinados por el Estado para el financiamiento de las empresas públicas” (p.86). Puede observarse cómo desde un principio, especialmente en la Secretaria de Planificación del Ministerio de Economía de la Nación, existía una conciencia acerca del sobredimensionamiento del sector público, y preocupaba cómo darle cauce al problema. Sin embargo, durante los primeros años de gestión, el ministro Grinspun y una franja de la UCR no consideraron el problema como prioritario aunque posteriormente las críticas al aparato estatal que lo señalaban como el responsable de la crisis económica que se vivía harían revivir la cuestión.

### **Reflexiones finales**

El diagnóstico económico de Grinspun apuntaba a reactivar la producción mediante un estímulo de la demanda por el lado salarial y el empleo. Era evidente que existía cierto optimismo fundado en solucionar por este medio el problema de la deuda que en aquel entonces recién se comenzaba a percibir como acuciante. La estrategia en este último aspecto fue confrontativa y se trató que subsumir los pagos de intereses al crecimiento, no obstante y a pesar de tratar de

---

<sup>9</sup> Como lo aclaran Frenkel y Fanelli (1986) el concepto de impuesto inflacionario remite a una expresión de los economistas ortodoxos. Por impuesto inflacionario (que en verdad vendría a ser un eufemismo) se entiende al proceso de redistribución de riqueza entre diferentes sectores de la sociedad. Mediante el proceso del impuesto inflacionario la inflación licúa la riqueza de los tenedores de M1 (la cantidad de dinero que circula en la economía en concepto de monedas y billetes, depósitos corrientes y reservas del Banco Central), aunque no se encuentra claro si esto beneficia directamente al Estado. Lo que si puede sostenerse es que el gobierno financiaba sus pasivos vía emisión monetaria (p. 66-67).

discutir en un plan internacional el asunto, no se logró ejercer presión sobre los acreedores ni los organismos internacionales quienes optaron por negociar caso por caso con los países latinoamericanos mermando cualquier posibilidad de formar un cartel de deudores. Es posible como sostienen algunos autores que la mirada estaba puesta en el pasado desarrollista y en las ideas que entendían que el viejo modelo de ISI seguía presente y que sería capaz de reactivar la economía y recuperar márgenes de maniobra económica. Pero por otra parte es innegable que los cambios y transformaciones que había dejado principalmente la dictadura comenzaron a imponer condicionantes uno por uno en la estrategia económica. Los poderes concentrados consolidados tras la dictadura como los tradicionales que no habían visto mermados sus beneficios -no así los pequeños sectores industriales debilitados por el proceso de reprimarización de la economía en aquellos años-, la crisis latinoamericana de la deuda y la caída de los términos de intercambio y un profundo sobredimensionamiento del Estado que sostenía importantes beneficios de sectores empresarios con escasa competencia e impacto en el empleo doméstico. Este último punto resultó primordial para que el Estado comenzara a ser identificado como el principal responsable de la crisis abriendo espacios al consenso neoliberal que se gestaba en los centros de poder mundial (vrg. Margaret Thatcher y Ronald Reagan) y el avance de la inflación comenzaba a dar cuenta de que las estrategias practicadas en el pasado deberían ser redefinidas, para desgracia de la economía nacional, en una negociación con los agentes económicos locales e internacionales. Quizás este hilo puede dar cuenta de los problemas económicos que sucedieron hasta la hiperinflación y que jaquearon los intentos de reconstruir un régimen democrático plural.

## Referencias

- Basualdo, E. (2001) *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera (1976-2001)*. Buenos Aires: UNQ.
- Basualdo, E. (2006) *Estudios de historia económica argentina: desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bekerman, M. (1990) El impacto fiscal de la deuda externa. La experiencia argentina, 1980-86. *Desarrollo Económico*, 29(116), 529-545.
- Bocco, A. y M., Naum (1999) *Privatizaciones. Reestructuración del Estado y sociedad*. Buenos Aires: Letrabuena.
- Botto M. (1999) *La relación partido y gobierno en la Argentina contemporánea. Análisis del proceso de toma de decisiones de los gobiernos de Alfonsín y Menem* (Tesis doctoral) Florencia, Italia. Instituto Universitario Europeo.

- Brenta, N. (2019) *Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Canitrot, A. (1991) Programas de ajuste y estrategias políticas: Las experiencias recientes de la Argentina y Bolivia: un comentario. *Desarrollo Económico*, 31(121), 125-139.
- Cavarozzi, M. (1997) *Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en Argentina*. Buenos Aires: Ariel.
- Cortes Conde, R. (2005) *La economía política argentina en el siglo XX*. Buenos Aires: Edasha.
- Damill, M. y Frenkel, J. (1994) *La macroeconomía de América Latina: de la crisis de la deuda a las reformas estructurales*. Buenos Aires: CEDES.
- Fanelli, J. y Frenkel, R. (1994) *Estabilidad y estructura:; interacciones en el crecimiento económico*. Buenos Aires: CEDES.
- Frenkel, R. y Fanelli, J.M. (1986) *Del ajuste caótico al Plan Austral*. Buenos Aires: CEDES.
- Gerchunoff, P. y Llach, L. (2019) *El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas argentinas*. Buenos Aires: Crítica.
- Heredia, M. (2006) La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno de la política económica de Alfonsín. En: Pucciarelli, A. (Comp.) *Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? (101-150)* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Heymann, D. (1986c) Inflación y políticas de estabilización. *Revista de la CEPAL*, 28, 67-98.
- Machinea, J. y Sommer, J. (1992) El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis en la balanza de pagos: la moratoria Argentina 1988-89. Altimir, O. y Devlin, R. (comp.) *Moratoria de la deuda en América Latina. Experiencia de los países (131-169)*.. Santiago de Chile: CEPAL.
- Ortiz, R. y Schorr, M. (2006) Crisis del Estado y pujas interburguesas. La economía política de la hiperinflación. En: Pucciarelli, A. (Coord.) *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? (461-510)*. Siglo XXI: Buenos Aires.
- Pesce, J. (2006) Política y economía durante el primer año del gobierno de Alfonsín. La gestión del ministro Grinspun. Pucciarelli, A. (Coord.) *Los años de Alfonsín ¿el poder de la democracia o la democracia del poder? (339-461)*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Rapoport, M. (2010) *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*. Buenos Aires: Booket.
- Schuldt, J. (1988) Políticas heterodoxas de estabilización en América Latina. *Apuntes*, 22, 79-121.
- Schvarzer (1998) *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000*. Buenos Aires. AZ.
- Smith, W. y Cusminsky, R. (1988) Políticas económicas de choque y transición democrática en Argentina y Brasil. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(2), 65-88.